

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**  
Medellín, diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

**SENTENCIA**

<b>Proceso</b>	: Ordinario de Segunda Instancia
<b>Demandante</b>	: <b>JHON BAIRO BOLÍVAR ACEVEDO</b> a través de <b>Nubia del Socorro Jaramillo Montoya</b> actuando como Curadora
<b>Demandada</b>	: <b>ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.</b>
<b>Llamados en garantía</b>	: <b>AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.</b>
<b>Radicado</b>	: <b>05001 31 05 009 2017 00846 01</b>
<b>Providencia</b>	: Sentencia
<b>Temas y Subtemas</b>	: Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, contradicción dictamen
<b>Decisión</b>	: Modifica Sentencia condenatoria
<b>Sentencia No</b>	: 17

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## ANTECEDENTES

### **Pretensiones:**

Se solicita se declare que el demandante presenta una pérdida de capacidad laboral del 71.70% de origen común, con fecha de estructuración el 17 de septiembre de 2014; se modifique el dictamen emitido por PORVENIR S.A. a través de Seguros ALFA S.A. el 14 de enero de 2016; se condene al reconocimiento y pago de la **pensión de invalidez** desde el 17 de septiembre de 2014, indexación o ajuste con el IPC, intereses moratorios, condenas ultra y extra petita, costas procesales.

### **Hechos relevantes de la demanda:**

Se afirma que el demandante laboró como soldador durante 25 años, es casado y cuenta con dos hijos; desde finales del año 2014 presenta deterioro neurológico olvidando nombres de las personas, las herramientas de trabajo, cosas de la infancia o lo ocurrido en forma reciente; de acuerdo a diferentes exámenes se encontró que el señor Jhon Bairo presentaba pérdida de la memoria progresiva, isquemia aguda en territorio vascular mayor, con diagnóstico de *episodio depresivo moderado y otras demencias vasculares*, enfermedad de alzheimer precoz secuela de encefalitis auto inmune, por lo que los médicos tratantes determinaron que “*no era apto para trabajar en absoluto*”, se le recomendó no salir solo a la calle, portar tarjeta de identificación, no utilizar herramientas peligrosas y no cocinar.

Expone que PORVENIR S.A. a través de Seguros ALFA S.A., emitió dictamen el día 14 de enero de 2016, según el cual, presenta una pérdida de capacidad laboral del 39.5% de origen común, estructurada el día 14 de octubre de 2015, cometiéndose el yerro de subvalorar deficiencias, omitir notas médicas y ayudas diagnósticas del 17 de septiembre de 2014 que dan cuenta del año *anatomofuncional* y que desde el 21 de abril de 2014 no puede trabajar por su cuadro orgánico y mental; razón por la cual, el demandante fue sometido a una valoración del daño corporal y porcentaje de pérdida de capacidad laboral (PCL) y ocupacional, emitiéndose dictamen el 1º de diciembre de 2016, asignándole el 71.70% de PCL de origen común, estructurada el 17 de septiembre de 2014, por los diagnósticos *demencia tipo alzheimer* y *depresión moderada*.

### **Respuesta a la demanda:**

**PORVENIR S.A.** a través apoderada judicial, aceptó lo referente a la calificación de pérdida de capacidad laboral por parte de Seguros de Vida Alfa S.A., como contratista del seguro previsional, conociendo el demandante que no estaba habilitado para reclamar pensión de invalidez; afirma que no fue convocada a la presunta valoración realizada y que el dictamen practicado ya quedó en forme por ministerio de la Ley. Se opuso a las pretensiones formuladas y propuso en su defensa las excepciones denominadas petición antes de tiempo, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción.

Por su parte, los apoderados de las llamadas en garantía **BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**, se opusieron a las pretensiones de la demanda y del llamamiento, formulando excepciones.

### **Sentencia de Primera Instancia:**

El **Juzgado Noveno Laboral** del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 18 de marzo de 2021, dejó sin efecto el dictamen emitido por Seguros de Vida Alfa S.A., declarando que **el demandante cuenta con el 71.70% de PCL de origen común, estructurada el 17 de septiembre de 2014**, teniendo derecho a la pensión de invalidez, **condenando a PORVENIR S.A.** a su reconocimiento y pago, con retroactivo pensional por valor de **\$63.831.398** causado **hasta el 28 de febrero de 2021** y continuar pagando la mesada pensional a partir del **1° de marzo de 2021**, en cuantía de **\$908.526** sin perjuicio de los incrementos legales, con la mesada de cada año; **indexación** sobre las condenas; autorizó a efectuar los descuentos en salud correspondientes; absolvió a la demandada y a las llamadas en garantía de demás pretensiones formuladas, declarando probada la excepción de cobertura. Costas a cargo de PORVENIR S.A., agencias en derecho en el equivalente al 5% de lo ordenado pagar, a favor del demandante.

### **Recurso de Apelación apoderado de PORVENIR S.A.:**

Sostiene que la única entidad autorizada para calificar al demandante es Seguros de Vida Alfa S.A., mientras que la aportada al proceso fue realizada por un médico pagado por el interesado, sin autorización por la normatividad vigente; en caso de tenerlo en cuenta, solicita se revisen los reparos consistentes en que no se tomaron en cuenta las indicaciones del Manual Único de Calificación de Invalidez, no se tomó en cuenta la mejoría médica máxima, debe haber evolución entre los tratamientos realizados al paciente, el dr. Cambas simplemente se ubicó como fecha de estructuración el día 17 de septiembre de 2014 cuando se realizó un TAC simple, pasando por alto que al demandante se le realizaron múltiples pruebas y exámenes hasta el 14 de octubre de 2015, sin tomar la historia laboral completa, solo en lo conveniente. Expone que, si el demandante quedó inconforme con el dictamen, pudo acudir ante las Juntas de Calificación de Invalidez, trámite que no agotó y procedió a pagar un perito particular. En tal sentido, siendo el dictamen de Seguros Alfa el único válido, no hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez; en consecuencia, tampoco procedería indexación sobre condenas. En caso de confirmarse la Sentencia, solicita no se imponga condena por intereses moratorios.

### **Alegatos de conclusión:**

Los apoderados de PORVENIR S.A., MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.,

reiteraron argumentos expuestos en el trámite de primera instancia y al sustentar el recurso de apelación.

### **Actuación realizada en segunda instancia:**

Mediante Auto del 1º de noviembre de 2022, esta Judicatura decretó como **prueba de oficio, dictamen médico laboral por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia**, con el fin de determinar la pérdida de capacidad laboral del demandante, el origen y la fecha de estructuración, teniendo en cuenta toda la información médica, incluyendo los dictámenes ya realizados por Seguros de Vida Alfa S.A. y por el Médico particular Luis Armando Cambas Zuluaga; dictamen que fue puesto en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días, mediante Auto del 27 de enero de este año (archivos 5 a 8).

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

La **competencia** de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con los

artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

### **Conflicto Jurídico:**

**El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia condenatoria de Primera Instancia, analizándose si Seguros de Vida Alfa S.A. es la única entidad autorizada para dictaminar la pérdida de capacidad laboral al señor Jhon Bairo Bolívar Acevedo o si tiene validez el dictamen aportado con la demanda emitido por médico particular. Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente modificar la Sentencia de Primera Instancia, por las siguientes razones:**

**No es objeto de discusión en esta Segunda Instancia,** que el señor Jhon Bairo Bolívar Acevedo solicitó ante PORVENIR S.A. la calificación de pérdida de capacidad laboral, siendo emitida por **Seguros de Vida Alfa S.A.**, entidad que mediante comunicación del 27 de enero de 2016, le comunicó que conforme a los parámetros fijados en el Decreto 1507 de 2014 (Manual Único de Calificación), se determinó una **PCL del 39.5% de origen común y fecha de estructuración el día 14 de octubre de 2015** que corresponde a fecha de *reporte de pruebas neuropsicológicas, estado actual del paciente,* evaluándose el diagnóstico *demencia en la enfermedad de alzheimer no especificada* (fls 81 a 86). Según historia laboral generada por PORVENIR S.A. el 11 de abril de 2016, el

demandante cuenta con 720 semanas cotizadas al Sistema de Pensiones y el último periodo cotizado corresponde a abril de 2013 (fls 125 a 130).

**Sobre lo que es objeto de apelación, el apoderado de PORVENIR S.A. sostiene que la única entidad autorizada para calificar al demandante es Seguros de Vida Alfa S.A., mientras que la aportada al proceso fue realizada por un médico pagado por el interesado, sin autorización por la normatividad vigente.**

Al respecto, **el Juez de Primera Instancia indicó en términos generales**, que en estos casos es necesario contar con el apoyo de medios técnico científicos ajustados al Manual de Calificación de Invalidez, por tratarse de temas que atañen a la ciencia médica, sin que deba el Juez emitir juicios que no estén sustentados en conceptos profesionales de expertos en la materia; explicando que si bien el dictamen aportado con la demanda no fue expedido por las entidades facultadas para ello en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, también lo es que **el Juez no está sujeto a tarifa legal de pruebas y forma libremente su convencimiento**, dándole pleno valor probatorio al dictamen aportado con la demanda, teniendo en cuenta las razones técnico científicas expuestas por el Perito en audiencia, que fundamentaron el dictamen emitido, encontrándolas claras y coherentes con la situación física del demandante, siendo el Perito persona idónea y con amplia experiencia en la materia; habiéndose garantizado su contradicción a la demandada y llamadas en garantía, anotando que las preguntas formuladas por los apoderados se caracterizaron más por apreciaciones personales como Abogados que en razones técnico científicas.



Acerca de este tema, **el artículo 41 de la Ley 100 de 1993** modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, **contempla que corresponde** al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP hoy ARL-, **a las Compañías de Seguros** que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, **determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose controvertir ante las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional y nacional**, indicando expresamente que **contra dichas decisiones proceden las acciones legales.**

Sobre la **contradicción del dictamen de pérdida de capacidad laboral**, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL1044 de 2019 Radicación 68074, reiterando CSJ SL5280-2018 y CSJ SL16374-2015, **indicó que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez no es prueba solemne**, de modo que puede ser controvertido ante los Jueces del Trabajo y que **no es un requisito de procedibilidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez agotar el trámite ante dichas Juntas**, ya que **la parte interesada puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, donde puede solicitar una nueva valoración**, para que sea el Juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión demandada; veamos:

*“...la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, sean regionales o*

*nacionales, no son pruebas solemnes, de modo que pueden ser controvertidas ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas.*

*(...)*

*Así las cosas, el ejercicio de los recursos previstos en el decreto en cita contra los dictámenes que profieren las juntas de calificación de invalidez, no es el único medio con que cuenta la parte contra la cual se pretenda hacer valer, para oponerse y disentir de su contenido, puesto que también puede controvertirlo ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, dentro del proceso, puede hacer uso de la solicitud de una nueva valoración, para que sea el juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión deprecada...”.*

De acuerdo a lo anterior, si bien es cierto, el ordenamiento jurídico faculta a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral y a las compañías aseguradoras, para emitir calificación de pérdida de capacidad laboral en primera oportunidad; también lo es, que su competencia no excluye otras formas de demostrar ese hecho, pudiendo la parte interesada allegar un dictamen con la demanda, como ocurrió en este caso y tampoco se exige como requisito de procedibilidad haber acudido ante las Juntas de Calificación de Invalidez –como sostiene el apoderado de Porvenir S.A.-, pues existe libertad probatoria conforme al artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, dictamen que se somete a contradicción y valoración probatoria conforme a las reglas procesales aplicables; pudiendo la parte demandada allegar también su propio dictamen.

Así mismo, en **Sentencia SL877 de 2020** el Órgano de Cierre de la especialidad laboral, señaló que al no exigir la ley determinado elemento de persuasión para acreditar la pérdida de capacidad laboral, **debe respetarse la libertad probatoria de la que están asistidos los juzgadores de instancia;**

explicando que si el Juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, podrá escoger para fundamentar su decisión, aquél que le merezca mayor credibilidad.

**En el asunto bajo estudio, se aportó con la demanda dictamen** emitido por médico particular de fecha **1° de diciembre de 2016**, asignándole al demandante el **71.70% de pérdida de capacidad laboral de origen común, con fecha de estructuración el 17 de septiembre de 2014** cuando se realizó TAC de cráneo, valorándose los diagnósticos *demencia tipo alzheimer* y *depresión moderada* (fls 87 a 92); dictamen **emitido por el doctor Luis Armando Cambas Zuluaga**, Médico especialista en Salud Ocupacional de la Universidad de Antioquia, Master en Medicina Evaluadora en Seguridad Social, Responsabilidad Civil y Seguros de la Universidad de Barcelona – España, explicándose de manera detallada su evolución clínica, describiéndose como fundamentos de hecho los siguientes: “...paciente de 49 años, casado, 2 hijos, soldador durante toda su vida, desempleado desde el 21/04/2013 con alzheimer con demencia temprana ... fue retirado de Saitempo Ltda. por lo que en el SISBEN solo hasta el año pasado le hicieron el diagnóstico de demencia temprana ... en una IRM le salió daño neuronal...”, en historia clínica de psiquiatría del 28/04/2016 se anota “...**cuadro de 3 años evolución de pérdida severa de memoria** ... la valoración neuropsicológica detectó la demencia temprana y la IRM detectó atrofia de ambos lóbulos temporales y aumento de surcos frontales sugestivos claramente de demencia tipo alzheimer ... varios primos con enfermedad mental y muerte precoz (50 A). Conceptúa que **el paciente no es apto para trabajar en absoluto, dado que requiere supervisión continua**, el paciente no recuerda su casa, ni el nombre de las herramientas ni el de la comida ...” (fl 91); así mismo, se presenta relación de documentos, exámenes y ayudas diagnósticas tenidos en cuenta, con base en historia clínica

emitida por los diferentes especialistas e instituciones médicas que atendieron al paciente.

De otro lado, esta Judicatura mediante Auto del 1° de noviembre de 2022, decretó como **prueba de oficio, dictamen médico laboral por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia**, con el fin de determinar la pérdida de capacidad laboral del demandante, el origen y la fecha de estructuración, teniendo en cuenta toda la información médica, incluyendo los dictámenes ya realizados por Seguros de Vida Alfa S.A. y por el Médico particular Luis Armando Cambas Zuluaga. Dictamen que fue emitido el día 27 de diciembre de 2022, donde **la Junta Regional asignó al señor Jhon Bairo el 85.30% de pérdida de capacidad laboral de origen común, con fecha de estructuración el día 26 de enero de 2015**, teniendo en cuenta el diagnóstico *demencia en la enfermedad de alzheimer, no especificada*. Pericia que fue puesta en conocimiento de las partes mediante Auto del 27 de enero de este año (archivos 5 y 11 a 14).

Frente a lo anterior, la apoderada de PORVENIR S.A. allegó otro dictamen, elaborado por Seguros de Vida Alfa S.A. de fecha 1° de febrero de 2023, en el que se expone que “*se acepta la deficiencia calificada*”, pero manifiesta su desacuerdo con la fecha de estructuración fijada por la Junta Regional el día 26 de enero de 2015, afirmándose que “*...que no es el médico internista el especialista idóneo en establecer para este caso la secuela, siendo un caso de las especialidades neurología y Psiquiatría...*” y que “*...es el reporte de la pruebas Neuropsicológicas, la herramienta por medio de la cual se confirmó el deterioro cognitivo en las diferentes dimensiones de la persona evaluada. Estas pruebas Neuropsicológicas se llevaron a cabo el día 14/10/2015, siendo este el día en el*

cual se alcanza el estado de invalidez, acorde a la definición del Decreto 1507 de 2014 precitada...” (archivos 16 y 17).

Debiéndose tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 232 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, conforme al cual, “...**El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso...**” (Negritas fuera de texto) y al tratarse de asuntos que requieren conocimientos especiales, el Juez está facultado para acudir a la asesoría técnico científica de perito que lo asesore en la materia, siendo la Junta Regional de Calificación de Invalidez una entidad técnica con trayectoria reconocida en la materia, que ofrece credibilidad en cuanto a la pérdida de capacidad laboral del demandante y su fecha de estructuración, acorde al contenido de la historia clínica y su evolución médica, valorándose el diagnóstico *demencia en la enfermedad de alzheimer, no especificada*. Adicionalmente, en el dictamen aportado por la demandada, se aduce que es el reporte de las pruebas Neuropsicológicas el indicado para confirmar el deterioro cognitivo y no por parte del Médico Internista, pero si se detalla el concepto del especialista de fecha 26 de enero de 2015, se encuentra que registró como diagnóstico *Demencia no especificada* y tuvo en cuenta para ello *valoración por neurología RNM de cráneo. TAC de cráneo: Acentuación de surcos* (fl 4 archivo 13); por tanto, no se trató de un concepto aislado del Médico tratante, sino soportado en pruebas diagnósticas. Por lo explicado, el dictamen emitido por la Junta Regional será acogido por esta Sala de Decisión

Laboral para resolver de fondo el asunto.

De acuerdo a lo anterior, el demandante acredita el estado de invalidez pues le fue asignado el 85.30% de pérdida de capacidad laboral de origen común y **entre el 26 de enero de 2012 y el mismo día y mes del año 2015, cuenta con 371 días cotizados correspondiente a 53 semanas en los tres (3) años anteriores a la estructuración de la invalidez** (fls 209 y 210 archivo 01), cumpliendo con los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993.

Siendo procedente **modificar** la Sentencia de Primera Instancia, en cuanto a la **fecha del disfrute** de la pensión de invalidez, que será **a partir del 26 de enero del año 2015** fecha de estructuración de tal estado, conforme al dictamen acogido en esta instancia (no 14 de septiembre de 2014); así como, en cuanto al valor del retroactivo pensional causado, que corresponde a la suma de **\$84.696.746**, liquidado desde el 26 de enero de 2015 y actualizado hasta el 31 de enero de 2023; confirmándose la decisión de Primera Instancia en todo lo demás, incluyendo lo referente a la condena en Costas.

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	No mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	12 mesadas y 5 días	\$ 644.350	\$ 7.839.592
2016	13	\$ 689.454	\$ 8.962.902
2017	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023	1	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000
TOTAL			\$ 84.696.746

### **COSTAS:**

**Se condenará en Costas en esta Segunda a cargo de PORVENIR S.A., al no haber prosperado el recurso de Apelación formulado;** fijándose como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) en favor del demandante; conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

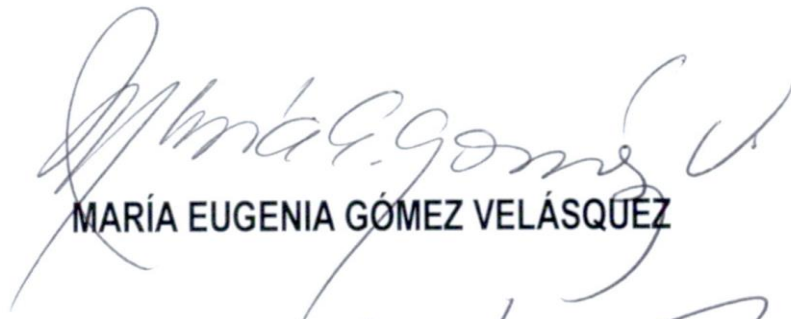
### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Se **MODIFICA** la Sentencia de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de **apelación** se revisa, en cuanto a la **fecha del disfrute** de la pensión de invalidez, que corresponde **al 26 de enero del año 2015** (no 14 de septiembre de 2014); así como, el valor del **retroactivo pensional**, equivalente a la suma de **\$84.696.746**, liquidado desde el 26 de enero de 2015 y actualizado hasta el 31 de enero de 2023; **confirmándose** la decisión de Primera Instancia en todo lo demás, incluyendo lo referente a la condena en Costas; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

**SEGUNDO:** Se **CONDENA en costas en esta Segunda Instancia a cargo de PORVENIR S.A.**, fijándose como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) en favor del demandante **JHON BAIRO BOLÍVAR ACEVEDO** quien actúa a través de Nubia del Socorro Jaramillo Montoya como Curadora; según lo indicado en la parte motiva.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL





**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SECRETARIA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

**HACE SABER:**

**Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:**

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **JHON BAIRO BOLÍVAR ACEVEDO** a través de **Nubia del Socorro Jaramillo Montoya** actuando como Curadora  
**Demandada** : **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**  
**Llamados en garantía** : **AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**  
**Radicado** : **05001 31 05 009 2017 00846 01**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, contradicción dictamen  
**Decisión** : Modifica Sentencia condenatoria  
**Sentencia No** : 17

**FECHA SENTENCIA:** 10 de febrero de 2023

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN** **CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy lunes 13 de febrero de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy  
lunes 13 de febrero de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
**Secretario**